



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

---

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

**RADICADO:** 11001-33-35-026-2018-00535  
**PROCESO:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**ACCIONANTE:** LUZ STELLA GUEVARA ULLOA  
**ACCIONADO:** BOGOTÁ, D.C., y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En el presente asunto, **LUZ STELLA GUEVARA ULLOA** promueve demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra de **BOGOTÁ, D.C., y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, con la finalidad de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. **Resolución No. 6627 del 30 de mayo de 2017**, mediante la cual se niega una inscripción en el Escalafón Nacional a la Docente Luz Stella Guevara Ulloa.
2. **Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017**, que resuelve un recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 6627 del 30 de mayo de 2017.
3. **Oficio S-2018-100452 del 30 de mayo de 2017**, por medio de la cual niega una solicitud de inscripción en el Escalafón Docente.
4. **Resolución No. 1127 de 3 de julio de 2018**, por medio de la cual revoca un nombramiento en periodo de prueba.
5. **Oficio S-2018-121855 del 11 de julio de 2018**, mediante el cual niega una solicitud de inscripción en el escalafón Docente

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

En primer lugar, se debe decir que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2°, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

*“ART. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:*

(...)

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.”

(...)

A su turno el artículo 87 de la norma *ibidem* establece lo siguiente,

**“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos.** Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.”

Subraya fuera de texto

A su vez, el artículo 89 de la norma señalada establece,

**“Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades.** Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato” (...)

Como ya se dijo en líneas anteriores, el actor pretende la nulidad de los actos administrativos, por medio de los cuales se le niega la inscripción al Escalafón Docente, sin embargo, la Resolución No. 6627 del 30 de mayo de 2017, cobró firmeza el 1º de septiembre de 2017, al resolverse el recurso de reposición a través de la Resolución 8828 del 9 de agosto de 2017, y al no haberse interpuesto el recurso de apelación que procedía en contra del primer acto acusado, el cual es obligatorio para el debido agotamiento de la vía gubernativa, da lugar a la ejecutoria de la misma, y el cual no es susceptible de control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del CPACA.

Ahora, vale la pena aclarar que, aun cuando la actora elevó un escrito solicitando la revocatoria directa de las resoluciones 6627 y 8828 de 2017, ello no interrumpía los términos de caducidad o el agotamiento de la vía

gubernativa, como por el contrario sí ocurre cuando se inicia el trámite de conciliación, pues tal situación se encuentra claramente establecida en el art. 96 de la Ley 1437 de 2017, el cual preceptúa lo siguiente:

**“Artículo 96. Efectos.** *Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.*”

De acuerdo a lo anterior, es claro para el Despacho, que no puede la actora intentar revivir términos con la petición elevada el 9 de mayo de 2018<sup>1</sup>, para que la administración se pronuncie respecto de un pedimento que fue resuelto mediante Resoluciones No. 6627 del 30 de mayo de 2017 y 8828 del 9 de agosto de 2017, con el propósito de cuestionar por vía judicial los actos administrativos antes enunciados junto con los contentivos de la respuesta otorgada al pedimento elevado y la respectiva resolución de los recursos interpuestos en contra de los mismos, habida consideración que la situación particular de la actora con respecto a la inscripción al Escalafón Docente, ya fue resuelta y la cual daba lugar para que la actora interpusiera recurso de reposición y en subsidio de apelación, sin embargo, solo fue elevado el recurso de reposición en contra de la Resolución 6627 del 30 de mayo de 2017, cobrando ejecutoria dicho acto administrativo el 1º de septiembre de 2017, teniendo en cuenta que, el recurso de apelación es un requisito **sine qua non** para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y el cual no interpuso dentro del término legal, dando lugar a un **indebido agotamiento de la vía gubernativa**.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente<sup>2</sup>:

*“La vía gubernativa se torna así en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y los administrados, cuando media un conflicto de intereses, edificándose no sólo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración, cuyo beneficio es de doble vía, pues, constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva, como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que, posteriormente, se ventilará dentro de un proceso jurisdiccional.*”

*Igualmente ha anotado esta Corporación que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley, sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilaran en sede judicial.”*

---

<sup>1</sup> Folios 46-52

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Providencia adiada 19 de febrero de 2015. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2004-00247.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo esgrimido en párrafos anteriores, es claro que dentro del presente asunto existe un indebido agotamiento de la vía gubernativa, así como una intención flagrante de revivir términos, es del caso estudiar dentro del presente asunto el fenómeno jurídico de la caducidad, teniendo en cuenta que el objeto central de la Litis es la inscripción al Escalafón Docente Oficial a la señora Luz Stella Guevara Ulloa.

Según la regla general de caducidad contemplada en el artículo 164 numeral 2) literal d) del CPACA, ésta debe computarse a partir del día siguiente hábil a la notificación, comunicación, publicación y/o ejecución del acto administrativo objeto de Litis.

Es decir, que dentro del presente asunto, se debe computar la caducidad del medio de control a partir del día siguiente a la notificación y/o comunicación de la Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017, atendiendo la regla consagrada en el numeral 2º del artículo 87 del CPACA, esto es, a partir del 1º de septiembre de 2017<sup>3</sup>, día hábil siguiente a la notificación personal del acto administrativo antes enunciado.

Es decir, la demandante tenía hasta el 20 de enero de 2018<sup>4</sup>, para solicitar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó a la actora la inscripción al Escalafón Docente Oficial, sin embargo solo hasta el 14 de septiembre de 2018<sup>5</sup>, la actora elevó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, dejando pasar más de 7 meses desde el momento en que fue notificada la Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017, para agotar el requisito de procedibilidad.

Frente a lo anterior, es claro que en el presente asunto existe caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, desde el 20 de enero de 2018, pues la notificación personal de la Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017, se realizó el 31 de agosto de 2017, luego entonces, la interesada tenía hasta el 20 de enero de 2018 para presentar la demanda, -teniendo en cuenta la suspensión de términos por el cierre de los juzgados con motivo de la vacancia judicial-, sin embargo, la presente demanda fue instaurada por la parte actora solo hasta el día 4 de diciembre de 2018, es decir, **1 año, 2 meses y 4 días**, después de haberse notificado personalmente la Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017.

En este orden de ideas, queda plenamente demostrado que se ha configurado la caducidad del medio de control, y corolario de ello, es del caso rechazar la demanda, pues la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte demandante para el efecto, y en este evento el artículo 169 del

---

<sup>3</sup> Fecha de notificación Resolución No. 8828 del 9 de agosto de 2017, 31 de agosto de 2017 – Fl. 46

<sup>4</sup> Vacancia Judicial 20 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018.

<sup>5</sup> Folio 64

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 1° que se rechazará la demanda “*cuando hubiere operado la caducidad*”.

Corolario de todo lo expuesto, se deberá rechazar la presente demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, tal como quedará anotado en la parte resolutive de este proveído.


En mérito de lo expuesto, el Despacho,

**R E S U E L V E:**



**PRIMERO.- RECHAZAR POR CADUCIDAD** la demanda interpuesta por la señora **LUZ STELLA GUEVARA ULLOA**, en contra de la **BOGOTÁ, D.C.**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO.-** Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
**Juez**

FV

 <b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b> <b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</b>  Por anotación en <b>ESTADO ORDINARIO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>27 DE MARZO DE 2019</b> , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)   <b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b> <b>SECRETARIA</b>
--

